

# ***Empate militar y reacomodo político en El Salvador***

**Benítez-Manuat, Raúl**

---

**Raúl Benítez Manuat:** Cientista político salvadoreño. Investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

---

*La guerra civil en El Salvador, iniciada en 1981, mantiene un equilibrio militar entre el FMLN y la fuerza armada. Esta situación militar se refleja en todos los ámbitos de la vida en El Salvador: el demográfico, el económico, el social, e incluso el cultural. Para ello se recurre al concepto de «guerra total». Parte del esfuerzo de contención del avance del FMLN se da en el nivel político. Se busca legitimar, a través de elecciones, a fuerzas políticas en ascenso como la Democracia Cristiana. Sin embargo, el triunfo de ARENA en las elecciones de 1988 y 1989 - se sostiene como hipótesis - significa una restauración y una modernización de la dominación oligárquica\*.*

En el presente ensayo esbozaremos algunas hipótesis sobre la realidad contemporánea salvadoreña, a partir de tres variables: la guerra civil, la economía y la política.

Si bien el drama que vive el pueblo salvadoreño tiene una multitud de orígenes, que han confluído durante los años 80 en la guerra civil, entre los factores históricos más importantes que se articulan para otorgarle a la crisis la dimensión actual pueden destacarse:

1) La ausencia de mecanismos de negociación política en el seno del Estado, dado que éste nunca modificó de manera radical el orden liberal-oligárquico consolidado en los últimos treinta años del siglo XIX. Esto hace que en el país la política se determine por un juego de alianzas entre la élite, formada principalmente por la llamada «oligarquía cafetalera», donde la economía, a pesar del fuerte impulso modernizador vivido entre 1950 y 1978, no evoluciona hacia un régimen más equitativo de distribución del ingreso. Por ello, en momentos de agudo enfrentamiento, la política se manifiesta como guerra. Esta es una de las razones por las cuales el mo-

vimiento revolucionario resalta el carácter excluyente del Estado y recuerda con gran énfasis la matanza de enero de 1932, cuando fueron asesinados más de 30.000 campesinos del Occidente del país por las fuerzas gubernamentales.

2) En la década de los 70 se agudiza la crisis política por múltiples acontecimientos: la guerra de julio de 1969 con Honduras, aunque representó un triunfo militar del ejército salvadoreño, obligó a repatriar a una gran masa de campesinos, que rápidamente se asentaron en la periferia de las ciudades, y en el campo comienzan a intensificarse las demandas por la reforma agraria. Este elemento se convirtió en altamente explosivo por la gran densidad demográfica del país: 229 habitantes por km. cuadrado en 1980.

3) En los años 70 surgen y se desarrollan en un contexto favorable las organizaciones armadas revolucionarias y gran cantidad de organizaciones populares. El contexto de gran polaridad política hace que para el Estado se genere una situación de ingobernabilidad y que emerja la opción revolucionaria como posible hacia 1978 y 1979.

4) El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, dirigido por la oficialidad joven del ejército, fue la última oportunidad para que se lograra una salida negociada al conflicto sociopolítico. El fracaso del proyecto reformista y la recuperación del poder político por las fuerzas más retardatarias durante 1980, provocan que durante este año se den las condiciones para el estallido de la guerra civil.

5) En 1980 se produce la polarización total del país. Se genera una situación de doble poder: el gobierno, apoyado de manera total por EE.UU., y las fuerzas democráticas y revolucionarias, que viven un acelerado proceso de convergencia política con la creación del Frente Democrático Revolucionario (FDR) en abril y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en octubre.

### ***Lo militar, dominante***

Al polarizarse la situación, los factores militares de la crisis son los que pasan a definir el devenir de los acontecimientos. Desde 1980 la guerra sustituye a la política como eje del conflicto social. En enero de 1981 estalla la guerra civil abierta, cuando el Comando Central del FMLN anuncia la «Ofensiva general militar» contra el régimen. Las transformaciones sufridas por el conjunto de la estructura social salvadoreña son muy profundas a consecuencia de esta guerra. La economía pasa a ser rápidamente una «economía de guerra» y «para la guerra». La política adquiere

otro carácter: por un lado, en el polo gubernamental se busca la institucionalización de un nuevo régimen político excluyente de las fuerzas populares, que a su vez articule un consenso necesario; y en el polo revolucionario se concibe a la política de dos formas íntimamente articuladas: la lucha por consolidar su hegemonía en el conjunto de los sectores sociales del país, principalmente los populares, y la lucha internacional para lograr su reconocimiento y el aislamiento del régimen.

De 1981 a 1984 se generaliza la guerra civil. El FMLN consolida sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país (el territorio salvadoreño tiene casi 22.000 km. cuadrados, por lo que el territorio de influencia insurgente es de 7.000), principalmente en el Norte y Oriente: los departamentos de Morazán, Chalatenango, parte de La Unión, Cabañas, San Miguel, Usulután y en el cerro Guazapa. Desde 1981 los protagonistas de dicha guerra son tres: las fuerzas gubernamentales, los EE.UU. y la alianza FDR-FMLN; las fuerzas armadas de El Salvador y EE.UU. actúan fusionadas en el esfuerzo militar contra la insurgencia. La intervención norteamericana, justificada por motivos de seguridad nacional, mediante el razonamiento de que no puede repetirse otra situación como la nicaragüense, se basa en la dirección estratégica de la guerra a través del US. Military Group y su total financiamiento. El US. Military Group dirige el conjunto de las acciones de las fuerzas armadas de El Salvador, a la vez que les provee de todo el equipo bélico necesario y entrena a sus efectivos, a través de los diversos programas de asesoría y asistencia.

A nivel político se busca que nuevas fuerzas, que anteriormente eran incluso consideradas como una «amenaza» para el poder oligárquico, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC), logren restaurar el sistema político. Para ello se impulsa un proyecto reformista contrainsurgente, cuyas partes medulares son diseñadas por el gobierno de EE.UU. Es el caso de la redefinición de la reforma agraria, cuyos proyectos son financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno estadounidense (AID). En esta restauración política se intenta legitimizar al régimen a través de una Asamblea Constituyente, elegida en marzo de 1982, que redacta una nueva Constitución que entra en vigor en diciembre de 1983, e inaugura un nuevo gobierno constitucional, surgido de las elecciones presidenciales de marzo de 1984, donde se elige a José Napoleón Duarte como presidente, por un período de cinco años. A su vez, es totalmente redefinido el rol de los partidos políticos en el país. Los sectores más cercanos a la oligarquía le quitan su apoyo al Partido de Conciliación Nacional (PCN), y fundan en septiembre de 1981 el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La lucha política legal, en este contexto contrainsurgente, se circunscribe a los partidos políticos ubicados del centro a la extrema derecha, y la disputa por el poder se da principalmente entre el PDC y

ARENA. El gobierno demócrata cristiano, a partir de 1984, no logra conquistar de manera total el apoyo del alto mando de las fuerzas armadas y de la oligarquía, por lo que se sostiene principalmente con el respaldo norteamericano.

### ***La economía de guerra***

Uno de los rasgos más notorios de la crisis económica que vive El Salvador es el descenso acelerado de la actividad económica, expresado en los niveles del Producto Interno Bruto (PIB): entre 1970 y 1975 creció a una tasa promedio anual de 5,5%; entre 1975 y 1980, al 1%; en 1980 fue de -8,7%; en 1981, de -8,6%; en 1982, de -5,3%; en 1983, de -0,7%; en 1984, de 1,5%; y en 1985 fue de 1,6%, según la CEPAL. A consecuencia de esto, son múltiples los indicadores que comprueban el descenso de la calidad de la vida. Por ejemplo, comparando 1985 con 1977, se ha incrementado la incidencia de la «pobreza extrema»: en 1977, de un total de casi 800.000 familias, 254.000 se encontraban en esa situación; mientras que en 1985, de 946.000 familias, 418.000 (50% de la población) se encuentran en esas condiciones. Las cifras de analfabetismo, consideradas entre las más altas de América Latina, eran en 1975 del 38% de la población en edad de leer y escribir, y en 1985 de 32%. En el rubro de la salud, el número de camas de hospital por cada mil habitantes desciende de 2,1 en 1970 a 1,2 en 1982. Y la mortalidad infantil es la más alta de América Latina, siendo en 1986 de 91 muertes por cada mil niños entre 0 y 5 años.

Una de las consecuencias de la economía de guerra en el país, es la distorsión de la actividad económica. Por el cierre de empresas (el ritmo de inversión de capital privado es de un promedio anual de 10,1% entre 1970 y 1975; de 7,2% entre 1975 y 1979; de -28,2% en 1980; de -10,8% en 1981; de -10,1% en 1982 y de -9,1% en 1983), el mercado se transforma en dirección hacia la economía informal: el desempleo abierto crece de 10,2% de la población económicamente activa (PEA) en 1970, a 30% en 1984, mientras que el subempleo crece de 44,6% de la PEA en 1970 al 55% en 1980.

La principal razón que explica este descenso en la calidad de la vida, se debe al privilegio de las necesidades bélicas. En síntesis, esto se expresa por el incremento del gasto militar en detrimento de los gastos sociales del Estado; en 1979 el gasto militar consumía el 8,7% del gasto gubernamental, mientras que en 1986, éste es de 28,3%. En cambio, el gasto en educación disminuye del 20,1% al 15,29% en el mismo período, y el gasto en salud baja del 10,17% al 7,10%.

Entre las más notables modificaciones estructurales de la economía salvadoreña se encuentran la participación económica de los salvadoreños residentes en EE.UU. y la incidencia directa de la asistencia económica y militar de EE.UU. en la balanza de pagos. Estos dos factores, producto directo de la guerra civil, eran prácticamente inexistentes al inicio del conflicto y en la actualidad son el pilar de la economía y el gobierno. Sin ellos muy probablemente la economía habría sucumbido.

### ***Refugiados internos y externos***

Las cifras sobre la cantidad de salvadoreños desplazados de sus lugares de habitación por efecto directo de la guerra (por vivir en zonas de combate) o indirecto (por desplazamiento forzoso o por la necesidad de encontrar medios de vida alternativos) difieren. No obstante, las estimaciones globales señalan que alrededor de un millón de personas se encuentran en dichas condiciones: medio millón en el interior de El Salvador, desplazadas del Norte y Oriente del país hacia el Occidente y las principales ciudades, y medio millón fuera del país, principalmente en EE.UU. y, en menor medida, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En su mayor parte esta población es campesina, que huye o es forzada a emigrar. Esta población es la que ha aumentado notablemente el sector informal de la economía y el desempleo y subempleo.

Cifras oficiales, elaboradas por el gobierno de El Salvador, señalan que las primeras migraciones causadas por la crisis política del país se dieron en 1980 en el poblado de Las Vueltas, Chalatenango, cuando se desplazó a 2.000 personas. El saldo de personas que legalmente han abandonado el país y no han retornado, entre 1982 y 1986 es de 280.790, mientras que los desplazamientos internos, realizados por el gobierno, principalmente para aislar a la insurgencia de la población campesina, se estiman en alrededor de 400.000 (bajo la filosofía contrainsurgente que busca aislar «al pez del agua»). Los departamentos donde ha sido más numeroso el desplazamiento de población coincide con los lugares donde la presencia del FMLN es fuerte: Morazán, 69.000; Usulután 48.000; San Miguel, 43.000; San Vicente, 38.000; y Chalatenango, 30.000.

Otras fuentes de información mencionan que los salvadoreños en México (que en su mayoría tratan de cruzar la frontera norte hacia EE.UU.) son en promedio 120.000, de los cuales en Guatemala radican 70.000; en Nicaragua 17.500; en Honduras 19.000; en Costa Rica 10.000 y en Panamá y Belice 3.000. Mientras que en EE.UU. la cifra supera el medio millón, según cifras del gobierno de ese país, de los cuales sólo 34.000 serían residentes legales. Una investigación, que realizó su estu-

dio con base en información local, proveniente de los principales centros urbanos receptores de inmigrantes ilegales de EE.UU., menciona que para 1987 habría un mínimo de 554.000 y un máximo de 903.000 salvadoreños.

### ***La intervención militar de EE.UU.***

Cuando EE.UU., en la posguerra, fortalece sus lazos militares en América Latina como una medida para confirmar su hegemonía, no consideró estratégico a El Salvador. Por ello, los niveles de asistencia económica y militar nunca fueron superiores a los «normales» (en términos comparativos). A fines de la década de los 70, se revalora el papel estratégico y geopolítico de la Cuenca del Caribe por dos acontecimientos: la firma de los Tratados Carter-Torrijos con el gobierno panameño en 1977, y la crisis del somocismo y el ascenso del sandinismo en Nicaragua en 1979. La grave crisis política que vivía El Salvador fue vista, repentinamente, como una potencial amenaza a la seguridad estadounidense si el movimiento insurgente lograba acceder al poder. El espectro de la generalización de los movimientos revolucionarios en la región - con base en la teoría del dominó -, al cuestionar su hegemonía pretende ser neutralizado. La estrategia de «contención» adoptada se implementó rápidamente.

Primero, si bien algunos sectores vieron con simpatía al gobierno reformista (que gobernó El Salvador entre el 15 de octubre de 1979 y el 9 de enero de 1980), la idea de reforzar a las fuerzas armadas, adaptar las reformas a la contrainsurgencia y buscar fuerzas políticas capaces de restaurar el sistema político, fue lo que predominó en el diseño contrainsurgente implementado. Esto se logra apoyando el pacto entre el PDC y la fuerza armada, firmado el 9 de enero de 1980. Inmediatamente después, en febrero, se conforma el US. Military Group, que pasa a dirigir estratégicamente la guerra.

Segundo, para evitar el derrumbe del gobierno, se inicia un ambicioso programa de asistencia que crecientemente sustituye al Estado salvadoreño en sus funciones de planificación y dirección de la economía y el país. Entre 1981 y 1987, la asistencia oficial a El Salvador es de aproximadamente 3.000 millones de dólares. En promedio, se han dedicado anualmente más de 4.000 millones de dólares. Tomando en cuenta el PIB del país (que, por ejemplo, en 1984 fue de aproximadamente 1.800 millones de dólares) y el gasto gubernamental, la ayuda de EE.UU. es del 20% para el primero - en promedio -; y para el segundo, ya en 1986, la asistencia de EE.UU. supera el gasto gubernamental (en 1986 éste fue de 582.000.000 de dólares, y la asistencia de Estados Unidos para el año fiscal 1987 fue de 608.000.000 de dólares).

Además, a lo anterior hay que agregar la contribución al PIB que realizan los salvadoreños residentes en EE.UU. (recursos popularmente conocidos como «pobredólares»), que para 1986 y 1987 se acerca a 1.000 millones de dólares. Esto significa que, a nivel cuantitativo, la guerra ha hecho que el PIB del país se genere mayoritariamente en el exterior, (situación notablemente sui generis en América Latina, pues El Salvador, a diferencia de la mayoría de países, por la «economía de guerra» es un país efectivamente importador de capitales).

La asistencia de EE.UU. se dedica en un 70% al esfuerzo bélico y solo un 30% se destina al beneficio de la población. La asistencia militar, a su vez, se reparte entre el esfuerzo de entrenamiento a los miembros de las fuerzas armadas, la dotación de equipo militar y las necesidades auxiliares de la guerra, como reconstrucción de caminos y puentes - para facilitar el tránsito de tropas -.

Para evitar el derrumbe del ejército, EE.UU. ha propiciado su reestructuración total, favoreciendo su profesionalización. En 1979 sus efectivos eran de 15.000, incluidos los cuerpos de seguridad; en 1987 suman 56.000. Asimismo, se ha fortalecido notablemente a la fuerza aérea, por la importancia que tiene para la contrainsurgencia. Entre las modificaciones sustanciales, producto de la estrategia norteamericana, se pasa, a nivel organizativo y técnico, comparando 1979 con 1987: de 13 batallones de maniobra a 41; de 28 aviones de combate a 63; de 5 helicópteros a 72 y de 4 barcos de guerra a 33.

### ***Dos estrategias***

De 1981 a 1988, en El Salvador se han aplicado dos estrategias de contrainsurgencia. La primera, ensayada entre enero de 1981 y 1984, se basaba en la idea de que al FMLN se le podía contener y combatir con resultados positivos mediante el llamado «cerco y aniquilamiento». Esta estrategia, implementada utilizando como planteamiento doctrinario la idea de «rápido despliegue», que el ejército de EE.UU. elabora a fines de los 70 para no repetir los errores cometidos en Vietnam, atribuidos principalmente al «gradualismo» y a la presencia directa de tropas busca, a través del empleo de grandes contingentes militares - para tener una superioridad táctica de fuerzas -, en un plazo corto de tiempo, aniquilar las concentraciones insurgentes más importantes. Entre 1981 y 1983, en diversas campañas militares, como las desarrolladas en Chalatenango del 30 de septiembre al 10 de octubre de 1981; en Morazán entre el 7 y el 29 de diciembre del mismo año; en San Vicente durante mayo y junio de 1983 (operación conocida como «Bienestar para San Vicente») y contra el cerro Guazapa en varias ocasiones, no se alcanzan los objetivos militares propues-

tos. Por el contrario, las ofensivas gubernamentales jamás llegan a la fase final (el aniquilamiento) y la insurgencia se fortalece tácticamente. Según el Departamento de Estado de EE.UU., el FMLN de tener 2.000 guerrilleros en 1980 pasa a un mínimo de 9.000 y un máximo de 12.000 en 1984.

Para frenar lo anterior, se busca una alternativa con la cual las fuerzas armadas superan el equilibrio militar y para que el FMLN no tenga la posibilidad de romperlo a su favor. Para ello se cambia la estrategia, implementando las recomendaciones de la doctrina de guerra de baja intensidad otorgando a la contrainsurgencia una dimensión integral, ya no sólo militar.

En lo militar, se cuestiona la estrategia de «rápido despliegue», considerando ahora que la guerra debe realizarse mediante pequeños destacamentos capaces de penetrar en el territorio bajo control del FMLN. Para ello se crean los batallones «cazadores», más rápidos y menos numerosos, y se fortalecen las pequeñas unidades llamadas «Patrullas de reconocimiento de alcance largo» (PRAL). También se busca crear una base social de apoyo (los comités de Defensa Civil) y se fortalece a la fuerza aérea y la aerotransportación de las tropas. Por otro lado se enfatiza el carácter político de la guerra, para lo cual es creado en 1985 el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, a fin de poder llevar adelante «la guerra psicológica», y en 1986 se implementa el «Plan Unidos para Reconstruir» (UPR), cuyos planteamientos se basan en que la guerra es 90% política y sólo el 10% es militar. A pesar de lo anterior, no se logra ninguna de las tres premisas de la estrategia de EE.UU.: la reactivación de la economía, la consolidación del régimen y la ruptura del equilibrio militar a favor de las fuerzas armadas. Por el contrario, en los tres aspectos mencionados, la situación se agrava en detrimento de la estrategia de EE.UU. y el gobierno local.

### ***Guerra y estrategia revolucionaria***

En el campo revolucionario, dada la diversidad de organizaciones que integran el FMLN, desde 1978 son puestas en práctica diversas estrategias y tácticas que en algunos momentos incluso son antagónicas. Fundamentalmente predominan dos posiciones. La primera, motivada por el triunfo sandinista en Nicaragua, busca integrar la participación activa del conjunto de la población a la ofensiva militar guerrillera (estrategia «insurreccional»). La segunda hace énfasis en que se debe dar un proceso de acumulación de fuerzas, principalmente en las zonas más deprimidas del país (estrategia de «guerra popular prolongada»). Al crearse el FMLN no hay una definición en favor de alguna de las dos posiciones, hecho que en ocasiones re-



percute en la falta de coordinación de las acciones militares insurgentes. Esta contradicción aflora hacia 1983 y, a partir de esta fecha, se produce una fusión que combina ambas estrategias, buscando el fortalecimiento del ejército insurgente y señalando que la participación masiva de la población debe buscarse cuando se rompe el equilibrio militar en favor del FMLN, en el momento en que las acciones guerrilleras urbanas adquieran importancia.

La consolidación del FMLN se manifiesta en varios indicadores. Entre los más significativos se encuentra el hecho de que ninguna de las campañas militares contrainsurgentes ha sido exitosa. Además, en sus ofensivas, el FMLN ha demostrado creciente capacidad para asestar golpes de gran importancia al gobierno. Otro indicador es que, a partir de que se implementa la guerra de baja intensidad por la fuerza armada, ésta no sólo no ha logrado éxito contra el FMLN, sino que, para contrarrestar dicha estrategia, éste ha extendido su acción hacia el Occidente del país y las zonas urbanas. Igualmente se ha reactivado la lucha reivindicativa de los sectores populares en las ciudades.

Los balances militares elaborados por ambas fuerzas no coinciden en las cifras, sin embargo, es evidente en las estadísticas existentes el gran aumento de las acciones en los años que lleva el conflicto. De una población estimada de 5 a 6 millones de habitantes (el último censo se realizó en 1971), han muerto víctimas de la violencia política 60.000 personas no consideradas combatientes de alguno de los dos ejércitos. Desde el estallido de la guerra, en enero de 1981, los balances de los combates son los siguientes: en 1981, el FMLN afirma que causó 5.133 bajas al ejército. Para 1982 y 1983, estadísticas de la Universidad Centroamericana señalan que el ejército tuvo 3.979 muertos y 2.934 heridos. El Ministerio de Defensa de El Salvador sostiene que sus bajas entre julio de 1982 y mayo de 1984 son de 3.347 muertos, 5.978 heridos y 598 desaparecidos. La Universidad Centro americana reporta que, según la fuerza armada, ésta causó al FMLN, en 1985, 1.948 bajas y en 1986, 1.677. Mientras que el FMLN afirma que causó al ejército 6.084 bajas en 1985 y 6.151 en 1986. El balance para 1987 es el siguiente: según el FMLN, provocó a la fuerza armada 8.000 bajas. El jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, señaló que el FMLN tuvo un total de 2.586 bajas y que el ejército sufrió 3.285 bajas, entre muertos y heridos. En 1988 el balance militar entre el FMLN y la fuerza armada es el siguiente: según la fuerza armada, ésta le causó al FMLN 1.691 bajas y, según el FMLN, éste logró 7.932 bajas a la fuerza armada.

Las estadísticas anteriores muestran el incremento cuantitativo de los enfrentamientos militares de 1981 a 1988. A nivel cualitativo, es preciso hacer las siguientes

consideraciones: 1) Ambos ejércitos han aumentado notablemente su capacidad de ataque. 2) No ha sido roto a favor de ninguno el equilibrio militar, observándose principalmente la consolidación del FMLN en las áreas bajo su control, donde incluso es evidente la existencia de un poder popular en funciones (control económico, político y militar). 3) La fuerza armada ha logrado impedir en términos generales que el FMLN pueda actuar en los principales centros urbanos. 4) El FMLN ha logrado dificultar el acceso por tierra de la fuerza armada hacia las zonas bajo su control (en los últimos tres años son superiores las bajas de la fuerza armada causadas por minas, que las producidas en combate), por ello, la tendencia es al fortalecimiento de la aviación, para contrarrestar esta deficiencia táctica del ejército.

### ***La reconstrucción del sistema político***

El primer indicador de que la situación política de El Salvador es sumamente grave se da en 1979. El 15 de octubre de ese año el ejército prácticamente se divide en dos, cuando la llamada «juventud militar» da un golpe de Estado apoyada por los sectores progresistas del país. El sistema político, encabezado por el Partido Conservador, que en las dos últimas elecciones presidenciales de 1972 y 1977 había llegado al poder mediante grandes fraudes electorales, se derrumba por completo. El país se encuentra en una grave «crisis orgánica», siendo evidentes en ese momento tres proyectos políticos: el conservador, encabezado por las fuerzas que habían sido desplazadas del poder; el reformista modernizante, encabezado por el conjunto de fuerzas que sostienen a la junta cívico-militar de gobierno; y el revolucionario, que dirigen principalmente los grupos político-militares, que se agruparán un año después en el FMLN. El proyecto reformista deja de tener vigencia muy rápidamente. Hacia el 9 de enero de 1980, con el pacto PDC-fuerza armada, las reformas iniciadas dan un vuelco para apoyar el proyecto contrainsurgente, polarizándose la situación durante 1980. En el sector democrático revolucionario se ubica la alianza FDR-FMLN (el FDR se crea en abril y el FMLN en octubre); y en el conservador el PDC, las fuerzas armadas y los sectores económicos y políticos oligárquicos. La guerra civil estalla el 10 de enero de 1981.

El PDC encabeza la junta de gobierno hasta mediados de 1982. La instalación de la Asamblea Constituyente, producto de las elecciones de marzo de 1982, promueve la creación de un «gobierno de unidad nacional», que institucionaliza un conjunto de nuevas reglas del juego. Este gobierno lo encabeza Alvaro Magaña. Magaña es nombrado a raíz del Pacto de Apaneca, del 3 de agosto de 1982. El Pacto de Apaneca fue promovido por la fuerza armada y la embajada de EE.UU. para lograr el equilibrio de poder entre el PDC y los sectores ubicados a su derecha, principal-

mente ARENA y el PCN. En la instalación de la Constituyente es notoria la presencia de la derecha, al presidir la Asamblea Roberto D'Abuisson, máximo dirigente de ARENA. La nueva Constitución termina de redactarse en diciembre de 1983. En marzo de 1984 se producen elecciones presidenciales y legislativas: el PDC obtiene el 43,41% de la votación. ARENA el 29,77% y el PCN el 19,31% (el resto corresponde a cinco pequeños partidos, que juntos no logran el 6% de los votos). En la segunda vuelta electoral de mayo Duarte logra la mayoría absoluta, y toma posesión el 1 de junio de 1984.

Duarte busca imprimir una nueva imagen a su gobierno. Su discurso se basa en que es la «tercera fuerza» que no comparte proyectos «extremistas», ni de «ultraizquierda» ni de «ultraderecha» (la primera sería la alianza FDR-FMLN y la segunda sería ARENA). Debido a la guerra civil, la crisis económica y otros factores como el terremoto del 10 de octubre de 1986, se da la reorganización y consolidación de la derecha política, encabezado por ARENA, que acusa de ineficaz a Duarte en el esfuerzo contrainsurgente, dirige un nuevo discurso político basado en un agudo nacionalismo, criticando la implementación de la guerra de baja intensidad por su fracaso, promoviendo tácticas militares acordes a la noción de «guerra total». Por estas razones, a las cuales se agregan elementos como la enfermedad de Duarte y acusaciones de corrupción, ARENA logra un triunfo arrollador sobre el PDC en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1988: obtiene 30 diputados contra 22 del PDC y 178 alcaldías contra 79 del PDC.

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1988 se pone en evidencia: primero, el completo fracaso del intento de construcción de un sistema político legítimo, que encabezara el PDC. Entre las principales razones se encuentra el carácter excluyente de las fuerzas políticas ubicadas a la izquierda del PDC, por lo que el juego electoral se convierte en una disputa por el poder, donde los protagonistas no enfrentan proyectos políticos sustancialmente diferentes. Segundo, que las fuerzas políticas progresistas y el movimiento popular no participan de la política legal existente. Esto es válido tanto para el conjunto de movimientos políticos, sindicales, campesinos, entre otros, que no plantean ni comparten la lucha armada, como para el movimiento revolucionario que encabeza el FMLN. Tercero, que el conjunto de planteamientos que sostienen la necesidad de una solución política negociada al conflicto (como el impulsado por la «Convergencia Democrática»), es difícil, en el contexto político actual, que pueda compartirse en el seno de la actual élite política, por la incidencia de «los factores reales del poder en El Salvador»: el alto mando de la fuerza armada, el gobierno estadounidense y la oligarquía.

La restauración oligárquica se da con el acceso a todos los órganos del Estado por la ultraderecha encabezada por ARENA. En las elecciones presidenciales del 19 de marzo de 1989 se vuelve a polarizar el esquema de confrontación política, acompañando la política a la guerra total (entendemos «guerra total» en el sentido que le otorga Karl von Clausewitz: cuando en una nación los recursos económicos, la lucha política, la cultura, los medios de comunicación, la acción estatal, la política exterior e incluso la cultura son de la guerra y para la guerra).

En marzo de 1989 los resultados de las elecciones presidenciales son los siguientes: de un total de 1.003.153 votos (el padrón electoral era de casi 1.800.000 ciudadanos en capacidad de votar), ARENA obtiene 505.370 votos, logrando el 53,82%: el PDC 338.369 (36,03%); el PDC 38.218 (4,07%); Convergencia Democrática 35.642 (3,80%); Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) 9.300 (0,99%); Unión Popular (UP) 4.609 (0,49%); Acción Democrática 4.363 (0,46%); y el Partido de Acción Renovadora (PAR) 3.207 (0,34%).

### ***Reflexión final***

El hecho de que por otra vez consecutiva los sectores representantes de la extrema derecha en El Salvador tengan acceso a las principales instituciones del Estado y sistema político (el alto mando de las fuerzas armadas, la Asamblea Nacional y la presidencia) demuestra la hipótesis de que la guerra, expresión militar de una completa polaridad política, se corresponde a la política de manera real. El espacio de acción de la política legal: las ciudades y el Sur-Occidente, territorios bajo el control militar del gobierno, son las áreas donde se reproduce el poder político-institucional (a través de las elecciones). Los fracasados intentos por constituir un sistema político «democrático» a través del PDC son expresión de la permanente crisis de hegemonía que se vive en el país. Por esto, la lucha política se disputa entre lo político y lo militar, donde, por la falta de espacios para que el conjunto de las fuerzas políticas del país puedan expresar sus proyectos, la ultraderecha tiene la posibilidad de lograr apoyo de un sector importante de la población, incluidos sectores populares que principalmente están muy afectados por la profundidad de la crisis económica y la guerra (como los sectores marginales y desplazados de guerra).

Durante 1987, producto de la firma de los acuerdos de Esquipulas II, se abrió la expectativa de que la tendencia a la prolongación de la guerra pudiera ser sustituida por un pacto político donde participaran todos los sectores del país. La implementación formal de los acuerdos por parte del gobierno, donde nunca existió volun-

tad real de negociación, por confiar en los resultados de las estrategias militares implementadas contra el FMLN, hace que se continúe privilegiando a los elementos militares y que se tome en cuenta a los políticos sólo como una expresión subordinada a los primeros.

Por esto, en el país existen cuatro opciones en el corto y mediano plazo: 1) La victoria de las fuerzas gubernamentales contra el FMLN. 2) La victoria de las fuerzas gubernamentales sobre el FMLN, apoyadas por destacamentos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. 3) La victoria de las fuerzas insurgentes del FMLN sobre la fuerza armada. 4) La negociación política, que debe incluir al conjunto de los sectores sociales y políticos del país. De no darse alguna de estas variables como alternativa (reaccionaria, revolucionaria o reformista), la prolongación de la actual guerra civil es la realidad que sufrirá el pueblo salvadoreño en los años por venir.

Es importante tener presente que la compleja realidad social, política y militar que vive El Salvador afecta de manera significativa el devenir de América Latina. El conflicto salvadoreño es uno de los pilares del conflicto regional que vive Centroamérica. A él se añaden otros fenómenos militares, políticos e internacionales como la prolongada guerra civil que se vive en Guatemala (que a fines de los años 80 había disminuido notablemente el nivel de los enfrentamientos militares, pero sin darse una negociación política entre la insurgencia y el gobierno), la dificultad para lograr un sistema político estable y para consolidar el proyecto revolucionario impulsado por los sandinistas en Nicaragua - dificultad agravada por la acción de EE.UU. apoyando la guerra contrarrevolucionaria y por la gran crisis económica -, la militarización acelerada de Honduras y, en menor medida, de Costa Rica y el conflicto de Panamá, que tiene componentes tanto estructurales e internos como geopolíticos y estratégicos.

\* Una primera versión de este trabajo fue presentada al V Certamen de Ensayo Político de NUEVA SOCIEDAD. El texto que se reproduce fue leído posteriormente ante el XV Congreso de LASA, Latin American Studies Association, en Miami, 1989.